

Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, desestimando la denuncia de prácticas antisindicales.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, según lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de contener una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia cuya unificación se pretende radica en determinar la *“calificación de la última oferta como el equivalente jurídico de un contrato colectivo cuando este no se suscita al término del proceso de negociación colectiva. Relevancia, de calificar a tal acto como equivalente de un contrato colectivo con expresa concordancia en materia de la negociación colectiva, entonces se debe concluir, al igual que lo resuelto en la sentencia de base, que el Primer Juzgado Laboral de Santiago, que el acto denunciado de no pago del bono de término de conflicto es un acto antisindical.”*

Cuarto: Que en el recurso de unificación se afirma que el de nulidad fue erradamente acogido por cuanto la demandada, al negar el pago del bono de término de conflicto de \$500.000, incurrió en un acto antisindical, perturbándose así la libertad sindical, por lo que el acto cumple con los requisitos objetivos de dichos actos.



La Corte de Apelaciones de Santiago para acoger el recurso de nulidad por la causal subsidiaria invocada, esto es, la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, analizaron el tenor de la cláusula que estiman los demandantes incumplida, la cual expresa, en cuanto al bono por firma de contrato, que *“La Empresa entregará a cada trabajador afecto un Bono por firma de contrato por la suma de \$500.00. (Quinientos mil pesos). Dicho pago se efectuará 48 horas después de haber firmado el presente Contrato Colectivo”*, estimando que de su tenor se desprende que *“en la última oferta presentada al Sindicato se ofreció el pago de un bono en el evento que se firmara el Contrato Colectivo, y no se trata entonces, de un pago a todo evento; lo que se corrobora cuando se señala que se pagará después de haber firmado el presente Contrato Colectivo”*. Así, habiéndose establecido que la suscripción del anexo de contrato de trabajo para los trabajadores reincorporados no fue obligatoria y casi la mitad de ellos ingresó a cumplir sus labores sin haber suscrito el referido anexo y que, además, la denunciada participó en las instancias de negociación y que mantuvo una conducta seria y razonablemente dispuesta a lograr una solución beneficiosa para las partes, estimaron que la sentencia impugnada no realizó un examen comparativo entre lo requerido por la norma jurídica y la actuación de la demandada, sino que solamente calificó el acto como contrario a la buena fe y, por ende, como conducta de práctica antisindical, al haberse ofrecido un bono dentro del proceso de negociación colectiva, que no se pagó dado que no se firmó el respectivo contrato, concluyendo que *“al no haberse firmado el Contrato Colectivo, según lo establece la cláusula 20° de la Última Oferta, claro es para esta Corte que, no se cumplió la condición para el pago del bono, de esta forma, la denunciada sólo ha hecho una correcta interpretación de la referida estipulación, más en caso alguno ha procedido de mala fe y menos su conducta se puede calificar de práctica antisindical, o desleal ya que no ha entorpecido ni ha dilatado el proceso de negociación colectiva, como lo decidió la sentencia recurrida”*, razón por la que consideran que la sentencia incurre en el vicio denunciado, ya que, al realizar una errónea calificación jurídica de los hechos, acogió la denuncia y le atribuyó al demandado la comisión de actos y conductas desleales, las cuales no revestían tal connotación.

Quinto: Que, para efectos de contraste, al recurrente presentó dos sentencias, la primera es la dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 2 de julio de 2019, en los autos sobre recurso de nulidad Rol N°2.652-2018,



demanda de mera certeza, en que la discusión decía relación con la determinación de si la última oferta del empleador, una vez votada la huelga, puede pervivir o, si aprobada la huelga, puede el proceso de negociación colectiva concluir mediante un contrato colectivo sobre la base de la última oferta; estimando que, por tratarse la huelga de un recurso que la ley consagra a los trabajadores, este derecho ostenta como único titular, al sindicato, los que tienen la decisión de terminar la huelga y volver a trabajar, por lo que, al manifestar el sindicato su voluntad de poner término a la misma, debe entenderse concluida, no teniendo incidencia la decisión del empleador. Asimismo, consideran que la oferta válida para este efecto, es la regulada en el artículo 346 del Código del Trabajo, la que no puede entenderse precluida, ya que a sus términos se ciñen los trabajadores que deciden reincorporarse individualmente después de la huelga y respecto de la cual la comisión negociadora exteriorizó su voluntad en orden a acogerse a la misma y concluir la huelga, por lo que conforme al principio de buena fe, *“y dado que esa comunión de voluntades mira exclusivamente el interés de las partes negociantes, y por ende no afecta a terceros ni al orden público, no cabe sino entender que la conclusión del proceso colectivo de la manera propuesta se aviene con una interpretación que de fuerza al contrato colectivo como expresión de la libertad sindical, pues en el caso de autos esta opción parece preferible al piso de la negociación del artículo 342, así como respecto de la nueva oferta, expresamente rechazada por los trabajadores, la que por lo demás, atento a su extensión, es esencialmente provisional. Ergo, la concurrencia de voluntades respecto de la última oferta, evidentemente favorece la solución del conflicto y refuerza la autonomía sindical y colectiva”* añadiendo, entre otras consideraciones, que *“los trabajadores que individualmente se reincorporaron a sus labores o que es lo mismo, se descolgaron de la huelga según lo permite el artículo 357, lo hicieron fuera de la hipótesis de esta norma, pues se requiere para ello la existencia de una proceso de huelga en curso, cuyo no es el caso, toda vez que en que el ejercicio de este derecho, las bases con fecha 25 de abril de 2018 a través de su comisión negociadora manifestaron a la empresa la decisión de suscribir el contrato colectivo. En consecuencia, esos trabajadores quedaron afectos a este instrumento”*.

La segunda sentencia que acompaña para efectos de contraste, es la dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de agosto de 2019, en los autos sobre recurso de nulidad Rol N°538-2019, proceso por prácticas



antisindicales y desleales, producto de despidos que se producen respecto de trabajadores sujetos a contratos a plazo fijo y que se encontraban participando en un proceso de negociación colectiva, denuncia que fue rechazada, al igual que el recurso de nulidad impetrado.

Sexto: Que, como se advierte, la materia de derecho propuesta en el recurso de unificación, en relación con los hechos establecidos en el fallo impugnado y el razonamiento que entrega, se distancia de lo resuelto en los de contraste, puesto que en el primero, la acción interpuesta es una demanda de mera certeza, en la que se solicitó el pronunciamiento del tribunal respecto a los efectos de la aceptación de la última oferta luego de iniciada la huelga, en el sentido de si permanecía vigente o no, atendido que el empleador había presentado durante la huelga, conforme el artículo 356 del Código del Trabajo, una nueva oferta y respecto a las formas de poner término a la huelga en relación a su titularidad, atendido que, durante el proceso, el sindicato aceptó la última oferta, declinando la huelga, más el empleador cuestionó la legalidad de dicha actuación, sin darla por concluida, todas cuestiones que no guardan relación con el asunto aquí debatido, en que se está denunciando una práctica antisindical por el hecho de no pagar un bono de término de conflicto a los trabajadores que estaban en huelga y que se reincorporaron a su trabajo, en el sentido de si dicha actuación vulneró el principio de buena fe, solicitando el pago del bono; misma circunstancia concurre respecto de la segunda sentencia de contraste, en la que si bien se promovió una denuncia por prácticas antisindicales y desleales, los hechos que le dieron lugar no tienen relación con lo aquí discutido, ya que se trata de trabajadores que se encontraban afectos a contratos a plazo fijo a los cuales se puso término dentro de un proceso de negociación colectiva. Así, al no concurrir dichos antecedentes fácticos ni jurídicos, resulta imposible efectuar el cotejo que se requiere para la procedencia de este arbitrio excepcional y de derecho estricto, de lo que fluye su desestimación en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia presentado en contra de la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 49.644-2021.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señora Andrea Muñoz



S., y los Abogados Integrantes señor Raúl Fuentes M. y Gonzalo Ruz L. No firman los Abogados Integrantes señores Fuentes M. y Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no estar disponibles sus dispositivos al momento de la firma. Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintidós.



QXVXYCKSX

En Santiago, a cuatro de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

